

EL CIUDADANO FANTASMA: LA DIMENSIÓN ILUSORIA DE LA  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CHILE ACTUAL

**Camila Bustos Gallegos**

Universidad de Chile  
Ingeniería en Información y Control de Gestión, 2do año  
[cbustosga@fen.uchile.cl](mailto:cbustosga@fen.uchile.cl)

**Maximiliano Díaz Rozas**

Universidad de Chile  
Ingeniería en Información y Control de Gestión, 2do año  
[mdiazr@fen.uchile.cl](mailto:mdiazr@fen.uchile.cl)

**SÍNTESIS:**

¿Es real la participación ciudadana en el Chile actual? La pregunta invita a cuestionar si lo que proponen los ciudadanos es realmente significativo para la toma de decisiones de los representantes del país. A partir de esto, el presente artículo analiza una serie de problemáticas que generan una brecha entre los chilenos y sus autoridades, lo que trae como consecuencia que el sufragio, el principal canal de participación ciudadana, no sea eficiente como vía de comunicación y opinión. Problemáticas como el descenso en el nivel de sufragio, los casos corrupción, la baja aprobación hacia las decisiones políticas, los extensos períodos en que los representantes se desenvuelven en un mismo cargo, son algunos de los puntos que serán estudiados para responder a ella.

**PALABRAS CLAVES:** Participación ciudadana, representatividad, voto, política.

EL CIUDADANO FANTASMA: LA DIMENSIÓN ILUSORIA DE LA  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CHILE ACTUAL

**Camila Bustos Gallegos**

Universidad de Chile  
Ingeniería en Información y Control de Gestión, 2do año  
[cbustosga@fen.uchile.cl](mailto:cbustosga@fen.uchile.cl)

**Maximiliano Díaz Rozas**

Universidad de Chile  
Ingeniería en Información y Control de Gestión, 2do año  
[mdiazr@fen.uchile.cl](mailto:mdiazr@fen.uchile.cl)

Muchas veces hemos escuchado a personas decir “si no votas, no tienes derecho a reclamar después”, o bien “si no votas, no eres ciudadano”. Estas frases son bastante alarmantes, pues presuponen que votar en las elecciones presidenciales es condición necesaria y suficiente para considerarse ciudadano activo dentro del mundo de la política. Sin embargo, si entendemos los conceptos “política” y “participación ciudadana”, las afirmaciones mencionadas se vuelven altamente cuestionables.

Comencemos por comprender que la política son las acciones que afectan o contribuyen a una sociedad. Es decir aquellas decisiones reflejadas en un cambio en el status quo de las cosas, en este caso, el estado actual de las leyes, normas y acciones un país. Para que la política tenga algún impacto en los puntos tratados un requisito importante es la participación de la ciudadanía.

Sin embargo, ¿qué entendemos por participación ciudadana? Para efectos de este escrito, serán aquellos actos donde el ciudadano se involucra de manera activa con los procesos de toma de decisiones públicas, impulsando así el desarrollo local y la democracia participativa, lo cual ayuda a fomentar la opinión en temas de contingencia, la eficacia en las ideas propuestas y la representatividad. Frente a esto, el Gobierno de Chile (2015) ha definido como participación ciudadana actividades como asambleas, juntas vecinales, congresos abiertos al público, cuentas públicas participativas u otras actividades donde el ciudadano tenga la oportunidad de tratar temas de interés nacional.

Chile ha sido un país marcado por sucesos, donde los ciudadanos son protagonistas de manifestaciones en respuesta a distintas problemáticas surgidas a lo largo de la historia. Momentos donde los ciudadanos salían a las calles a exigir aquello que necesitaban, como el movimiento obrero que culminó en la trágica masacre de la Escuela Santa María. Posteriormente durante Dictadura, los chilenos lucharon por recuperar su democracia mediante las jornadas de protesta nacional en las avenidas céntricas de la ciudad, e incluso hoy en día, donde se han visto manifestaciones como la conocida “Revolución Pingüina” que buscaba la gratuidad en la Prueba de Selección Universitaria y el pase escolar, junto con la reevaluación de la jornada escolar completa, entre otras demandas. Y el número aumenta: recordemos las manifestaciones estudiantiles en el año 2011 por una educación gratuita, las marchas apoyando la despenalización del aborto y el descontento por el sistema de pensiones. Sin embargo, el tener que recurrir a grandes manifestaciones en las calles para poder ser

escuchados es un claro resultado de que algo no está funcionando, haciendo que nuestra actividad como ciudadanos no sea más que una ilusión que no llega a ser considerada por las autoridades políticas.

Aunque no es condición suficiente para considerarse activos en la política, sabemos que el sufragio es uno de los canales de participación más reconocidos y relevantes en nuestra cultura. A votar, comúnmente, se va con el objetivo de que si el candidato llega a ser electo, represente los intereses de sus votantes. Sin embargo, con todos los sucesos que han ocurrido en nuestro país se ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la efectividad de nuestro sistema electoral actual. Promesas incumplidas desde las autoridades políticas hacia la ciudadanía, casos de corrupción, influencia de privados en decisiones políticas, reformas incompletas y arreglos parciales que no solucionan el problema central, son algunas de las razones que han hecho que sea tan criticado y cuestionado por sus ciudadanos. Para comprender de mejor manera el problema central, es necesario saber cómo funciona dicho sistema en nuestro país.

Desde un comienzo Chile ha luchado por la inclusión de la totalidad de sus ciudadanos al sistema electoral. En 1810, cuando se dictó el primer reglamento de sufragio, los chilenos manifestaron su descontento debido a que éste señalaba que sólo tenían derecho a voto aquellos personajes de un sector social reducido, que “por su fortuna, talento y empleo” podían tomar las decisiones de todo el país. Actualmente el voto se rige por un sistema constitucional, en el cual existen elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales y de Consejeros Regionales (CORES).

En el caso de las presidenciales, los ciudadanos cada cuatro años se dirigen voluntariamente a votar por el candidato que más se adecue a sus ideales, mientras que en las elecciones de senadores y diputados se vota con un sistema de listas, conocido como Sistema Binominal. Últimamente estos sistemas han sido cuestionados y criticados por los ciudadanos, resaltando frecuentemente el hecho de que no representa al pueblo chileno como “debe ser”, al no reflejar su participación real.

Un estudio del Observatorio Político-Electoral de la Universidad Diego Portales señala que se ha reducido la cantidad de votantes desde que el voto se hizo voluntario, siendo mucho más alta la tasa de participación en los segmentos sociales altos (Contreras y Navia, 2013). Según indica el estudio, en 2012 la participación descendió significativamente a casi 6,7 millones de votantes, alcanzando los niveles históricos más bajos desde el retorno a la democracia en 1989, considerando las elecciones presidenciales. Es una ironía ver cómo el proceso se repite, volviendo a dejar a la minoría escoger qué sucede con nuestro país; solo que a diferencia de antes, hoy estamos conscientes de ello. La causa de todo esto parecer ser que el hecho de escoger a un representante no significa, realmente, participar ni contribuir con la comunidad.

Siendo el voto una lucha constante, que ha significado esfuerzo y sacrificio para tener la oportunidad de ejercerlo, existe un descontento bastante fuerte respecto a nuestro sistema actual: fue un éxito que no dio los resultados que se esperaban, pues en la actualidad gran parte de la población no lo utiliza. A pesar de ello, el sufragio es considerado como uno de los principales canales de participación en Chile. Para algunos es incluso el único existente, dando paso a asumir, como se ha señalado, que este no resulta ser un canal real de participación sino más bien una ilusión de participación ciudadana activa.

Que el sufragio, como canal reconocido de participación, no logre hacer que los ciudadanos sientan que tienen voz ante las decisiones políticas, es, en efecto, el factor externo que provoca su descenso. Este punto reduce incluso la posible intención de participar de otros canales existentes, puesto que logra generar desconfianza hacia la funcionalidad del sufragio por su dudoso impacto en el contexto político actual de Chile: la baja aprobación existente hacia las autoridades políticas, la existencia de la “profesión política” y los casos de corrupción.

I. **Baja aprobación:**

En el Chile del 2015, los bajos niveles de aprobación ya no sorprenden. Las cifras que alcanzan quienes actualmente representan a los ciudadanos en los distintos poderes del Estado chileno distan ampliamente de los altos porcentajes obtenidos por ex miembros como Ricardo Lagos Escobar, que logró terminar su mandato con un promedio de aprobación cercano al 60%, o Michelle Bachelet antes de finalizar su mandato, llegando incluso al 81% de aprobación durante diciembre 2009 (CEP Chile, s.f). Según la encuesta Adimark (GFK Adimark, 2012) este último fue el nivel más alto de su gestión, creando precedentes históricos.

Sin embargo esta misma encuesta ya daba luces de un problema mayor. El primer síntoma fueron los bajos niveles de aprobación del Congreso: el Senado y la Cámara de Diputados no superaban el 27% y el 23% respectivamente de aceptación por parte de la ciudadanía. Ese mismo año las dos coaliciones políticas más importantes, la Alianza y la Concertación, marcaban como tope máximo un 31% de conformidad por parte de los ciudadanos. La desconfianza empezaba a ser un tema real para las personas, quienes durante una larga transformación que detallaremos más adelante, pasaron de ser espectadores a ser participantes activos de la contingencia chilena.

Analizando profundamente estas estadísticas podemos notar que posteriormente, durante la gestión de Sebastián Piñera, comenzó a darse el fenómeno contrario al de sus antecesores. El presidente alcanzó el nivel más bajo de aprobación durante abril 2012 con un 26% y un 66% de desaprobación de su gestión (CGK Adimark, 2012) explicado principalmente por las bajas que mostraron atributos como confianza, liderazgo y la capacidad de enfrentar conflictos, reflejada claramente por el trabajo realizado en temas de educación. Ese mismo mes 48 mil estudiantes –según cifras oficiales de Carabineros (La Tercera, 25-04-2013) – realizaban la primera marcha masiva del año insistiendo en sus demandas: principalmente, la gratuidad y otras mejoras sustanciales al sistema educacional chileno.

El informe de Adimark, además, destacaba nuevos precedentes en la opinión pública sobre el trabajo realizado por el Congreso Nacional: los senadores obtenían un 17% de aprobación y sus colegas diputados solamente un 16%, lo cual queda explicado principalmente por las polémicas rencillas entre los participantes del Congreso Nacional (El Mostrador, 2012), quienes luego de la decisión de aumentar en \$2 millones sus asignaciones, acabarían recibiendo \$7 millones mensuales para realizar su labor. Estos hechos, entre otros, marcaron un punto de inflexión que estableció las bases de la extraña relación de los chilenos con sus representantes y la profunda distancia existente entre ellos.

Este fenómeno se reitera en el período siguiente donde, a pesar de tener nuevos representantes en el congreso, los vicios del sistema electoral como el binominal siguen incluyendo a personas que, a pesar de no ser escogidas por una mayoría obtienen puestos de representación ciudadana y autoridad. Tal es el caso de José Antonio Kast (UDI) tercero en la votación, Daniel Núñez (PC) cuarto lugar, Leonardo Soto y Jaime Bellolio (UDI) segundo y tercero respectivamente en sus distritos correspondientes.

Desde que asumieron los nuevos parlamentarios, las encuestas solo han presentado bajas, llegando incluso a marcar números bajo el 15% para los Senadores durante el último semestre del año 2015, mientras que los diputados no superaron el 12% de aprobación (GFK Adimark, 2016). Estos mismos indicadores presentan los peores niveles de aceptación ciudadana en el segundo período de Michelle Bachelet, marcando niveles inferiores al 30% durante el último semestre 2015 y comienzos del 2016.

Al revisar los índices de desaprobación que han tenido los representantes chilenos durante el año 2015-2016, vemos que la actual presidenta supera el 60%. Más preocupante aún son los números del Congreso Nacional, que presenta valores sobre el 80%. Esto resulta particularmente grave por ser ellos los responsables de tomar

las decisiones, de crear las leyes y dirigir al país, lo que, sumado a la extensa lista de casos de corrupción del último tiempo, explica la importante generación de desconfianza en la ciudadanía.

## II. Profesión política:

Chile no es un país que se destaque principalmente por la cantidad de habitantes que tiene: sus 17 millones lo hacen ver como un país pequeño, respecto de los casi 50 millones de personas que viven en Argentina o los más de 200 millones de Brasil (Banco Mundial, s.f.). Para el caso chileno, bien reza el dicho “el mundo es un pañuelo”, y es probable que entre una persona y otra haya pocos grados de separación. Por lo tanto, tampoco es raro darse cuenta que en la política chilena son muy pocos los actores nuevos, y es común verlos año tras año ocupando los medios de comunicación, desenvolviéndose en algún cargo público o con un puesto en el Congreso Nacional.

Javiera Arce, en su columna de opinión titulada “La política como profesión” (ARCE, 20-05-2015), nos cuenta sobre cómo se ha “profesionalizado” el político chileno, que se dedica a negociar sus decisiones en función de beneficios personales y de terceros particulares, y se encarga, además, de asegurar sus puestos durante años. Actualmente en Chile existen representantes en el Congreso que llevan 24 años ocupando puestos similares y que durante el año 2014 volvieron a postular (BioBio Chile, 13-11-2013). Entre ellos es importante destacar a Sergio Aguiló (Izquierda Ciudadana, ex PS), quien ya fue reelegido y sumará un total de 28 años en el Congreso como Diputado al término de dicho período (Servicio Electoral de Chile, s.f.). Así mismo, entre los senadores que participaron de las elecciones parlamentarias del año 2014 y que fueron reelegidos está Jorge Pizarro (DC), quien contabilizará al final de su período 32 años ocupando un cargo similar.

Durante el año 2015, comenzó a cuestionarse la participación que tienen algunos diputados y senadores en el desarrollo de sus actividades parlamentarias. En febrero del mismo año, La Tercera (01-02-2015) publicó un reportaje en el que analizaron los viajes que algunos parlamentarios hacían y que no tenían relación directa con las áreas que representan. Entre ellos se destaca Patricio Melero (UDI), Gabriel Silber (DC) y Gustavo Hasbún (UDI), quienes utilizaron los pasajes de libre disposición que costea el Congreso para asistir reiteradamente a regiones que no tienen relación directa con sus funciones. Hasbún, hasta ese momento, había realizado 20 viajes a Temuco a pesar de ser representante del distrito número 26 de la Región Metropolitana. En octubre del mismo año, el parlamentario fue cuestionado por un polémico mensaje publicado en las redes sociales que reza: “mi gratitud para la gente de trabajo y esfuerzo de la región de La Araucanía que me han hecho sentir en mi propia casa. Estoy con ustedes y voy a trabajar por una región más próspera y con mayor justicia social” (El Mostrador, 07-10-2015). En el mensaje saludaba a las personas que viven en la Araucanía y compromete su trabajo con ellos, aunque él mismo se desempeñaba como parlamentario en otro distrito y aún le restaban más de dos años para finalizar su período al momento de las declaraciones.

Ejemplos como éstos ponen en duda la honorabilidad de quienes han sido escogidos como representantes de la ciudadanía en el Congreso Nacional. Estos hechos ponen en duda el cómo desarrollan su trabajo, asegurando sus puestos e impidiendo la participación de otros miembros de la ciudadanía, como representantes vecinales. A pesar de su rol social, disminuyen el espacio para la inclusión de otros puntos de vista como el de las mujeres, jóvenes o pueblos originarios, transformando esas opiniones en voces omitidas. Por estos motivos, por ser éstos quienes se mantienen siempre en el Congreso y por su baja aprobación, aumenta el grado de desconfianza y resentimiento en la población, generándose un descontento aún mayor.

### III. Corrupción:

Al contrario de lo que se cree popularmente, Chile es un país con una percepción de corrupción muy baja, puesto que al ser comparado con otras localidades de Sudamérica resulta tener un bajo índice. Sin embargo los pocos casos que se han identificado son de tal magnitud que generan una gran disconformidad hacia las instituciones, tanto privadas como estatales. El descontento social se produce cuando una proporción significativa de la población se siente injustamente postergada, abusada y/o frustrada en las expectativas de progreso.

Tal como se demostró anteriormente, Chile es un líder indiscutido en cuanto al descontento general con la política y sus instituciones. Su nivel es tan palpable que algunos humoristas utilizan estos hechos en sus rutinas, ridiculizando al sistema de justicia, de seguridad, de pensiones, de salud, etc. Resulta algo tan aprendido por nuestra cultura, que incluso somos capaces de reírnos y manifestarnos en un ambiente “cómodo” gracias a *lo asumido* que tenemos el deficiente funcionamiento de dichas instituciones.

El 16 de abril del año 2015 se realizó una manifestación que quedó grabada en la memoria de los ciudadanos (Radio Universidad de Chile, 16-04-2015). El motivo fue bastante claro: llamar al Gobierno a que incluya a la ciudadanía en los cambios que se requieren y cambiar la constitución heredada de la Dictadura. Ese fue el mensaje que entregaron las 180 mil personas que se manifestaron en las calles aquel día: “Que los corruptos no decidan lo que Chile necesita”, un mensaje claro y atinente que demuestra que se tiene una percepción muy clara de las incapacidades del gobierno, además de la exigencia de incluir a los ciudadanos a las decisiones políticas que nos afectan.

La causalidad del asunto es la siguiente: existen miembros de la política que no son considerados “representativos” por los votantes. Poseen cierta implicancia en instituciones privadas y estatales, y mantienen sus posiciones en el largo plazo. El que sean ellos mismos quienes toman las decisiones políticas, es un factor determinante que genera una altísima desconfianza en la ciudadanía, una enorme distancia entre ellos y los chilenos, y en consecuencia, una baja participación en los canales vigentes.

Sin embargo, existe un tópico que aún no se ha considerado y que nos revela otra arista. En los últimos años, los ciudadanos se han transformado en un elemento importante de la agenda política del país: ciudadanos jóvenes y mayores han participado activamente para plasmar sus ideas y necesidades en el desarrollo político del país. Esta nueva forma de participación ciudadana se encarna en forma de multitudinarias marchas y en la acción conjunta de agrupaciones e instituciones que proponen soluciones, otras que realizan acciones que van en directo beneficio de los problemas planteados, y también en la fiscalización a entidades tanto estatales como privadas para el cumplimiento de promesas, objetivos y se exigencias legales.

Esto comienza en el interés personal, que luego se transforma en interés común, es decir, el interés de una comunidad. Tal como describe Lucio Cuenca en “Mapa del despertar comunitario ante la somnolencia autoritaria” (julio, 2012), en los últimos años ha habido un despertar colectivo, en el que tanto los intereses individuales como los compartidos se defienden. El ciudadano actual ya no cree lo que sale en televisión de buenas a primeras, sino que elabora sus propias conclusiones a partir de la información que puede conseguir, apoyado principalmente en las nuevas plataformas digitales que le permiten investigar y conocer materias que respetan sus tendencias. Las personas son capaces de interpretar y cuestionar los intereses que puede haber detrás cada decisión que toman sus autoridades, las personas ya no aceptan casos que involucren irregularidades o que sean perjudiciales para ellos. Algunos ejemplos de esto son los múltiples casos que presenta Cuenca, de los que se pueden mencionar casos como la detención del proyecto para obtener energía desde los geysers del Tatio, o el cierre de la planta faenadora de cerdos de Freirina gracias al trabajo conjunto de los vecinos.

Hay distintos casos que, por iniciativa de las personas, inspiradas por la necesidad de un cambio o mejora de alguna situación particular, terminan transformándose en leyes. Casos como la Ley Emilia, que establece nuevas penas para el manejo en estado de ebriedad; la Reforma Educacional, ganada por miles de personas luego de más de 10 años de constante lucha iniciada por la “Revolución Pingüina”, es decir, por los estudiantes; la Ley Ricarte Soto, iniciada por el periodista que llevaba dicho nombre y que vivió en carne propia la realidad de la salud en Chile y el poco apoyo del Estado hacia los ciudadanos que sufren de enfermedades que se manejan con tratamientos de alto costo; y el Acuerdo de Unión Civil, que desde el año 2003 comenzó una campaña apoyada principalmente por el Movilh para que hoy en el año 2016, tanto parejas de distinto o igual sexo puedan ser parte de un mismo núcleo familiar y obtener así los mismo beneficios legales de las parejas que viven en matrimonio, son algunos de ellos. El factor común, es que todos estas responden a necesidades de las personas, inquietudes que les motivaron a exigir a sus autoridades cambios en las regulaciones existentes, cercanas a la realidad que viven día a día. Asimismo, existen múltiples iniciativas que buscan regular y fiscalizar las labores que desempeñan los altos mandos en Chile, exigiendo transparencia e incentivando la participación ciudadana informada, como se autodefine el portal Ciudadano Inteligente, que además reúne otros proyectos que buscan que las personas formen parte del desarrollo político de Chile.

En resumen, las manifestaciones en la vía pública, los acuerdos en las redes sociales y las organizaciones ciudadanas son acciones que nacen desde las personas, que han logrado definir el quehacer de los distintos gobiernos durante los últimos años, puesto que se han visto forzados a atender las necesidades urgentes que los ciudadanos evidencian, y que hoy exigen.

Con todo esto se logra comprender que el sufragio, aunque no es el único, es un canal de participación altamente considerado por los ciudadanos, el cual se ha visto sujeto a desvalorización por los mismos. Los chilenos están votando cada vez menos, porque ya no se cree en las autoridades políticas. Varios de los canales existentes de participación están expuestos a una desconfianza en relación a su efectividad, es decir, no se cree que las acciones que allí se impulsen lleguen efectivamente a quienes realizan la toma de decisiones del país, debido a que una serie de sucesos que han generado decepción en Chile, tales como los casos de corrupción, la baja aprobación hacia los políticos y la política como profesión, actúan en desmedro de estos canales de participación, provocando que se genere un distanciamiento entre el ciudadano común y la autoridad política.

La ineffectividad de los canales de participación genera una amplia brecha entre el ciudadano común y la autoridad política, que se traduce luego en una muy alta desconfianza. Mediante canales como el voto se crea la ilusión de que los ciudadanos son parte activa y relevante de la toma de decisiones, pero basta constatar los hechos acaecidos y ya mencionados en este ensayo para constatar que para los miembros del congreso el voto de las personas no pesa ni determina su labor. De acuerdo a estola idea de ciudadano termina por ser similar a la de un fantasma, que puede estar en muchos lugares sin ser visto ni considerado entre los miembros presentes, pudiendo incluso opinar y discutir sin que su voz se materialice ni sus ideas se consideren.

Es necesario destacar que en el contexto chileno actual no existe una participación real en el medio común y tradicional del voto debido a que éste no da espacio para la opinión y la crítica, además del fuerte descenso en su utilización. Sin embargo, las calles donde se manifiesta con fuerza el descontento que tienen los ciudadanos por las decisiones políticas muestran que la amplia brecha que existe entre el ciudadano común y la autoridad se rompe con estas movilizaciones, forzando la emergencia de un medio no tradicional para ser escuchados.

Es interesante el hecho de que, existiendo mecanismos para generar voz en la ciudadanía ante las decisiones políticas, existan factores negativos que se encaminen en desmedro de ellos. Es mucho más relevante que sea

la misma ciudadanía la que esté forjando y pujando por los temas que deben tratarse en el congreso, demostrando un alto interés por ser partícipes de estas decisiones. Aunque no sea el camino regular, las manifestaciones han sido determinantes para llevar la voz de Chile al congreso, lo que pone en evidencia la necesidad de que exista un canal real de participación, de modo que salir a las calles a exigir lo necesario no sea el único medio al que recurrir para ser escuchados.